

FILA 1: En la comunidad Shuar, una niña de 14 años es casada según tradición ancestral de "matrimonio de alianza". La menor escapa y solicita protección estatal. La justicia indígena ordena su retorno invocando el artículo 171 sobre competencia exclusiva y el artículo 57 sobre derechos colectivos. La justicia ordinaria ordena protección basándose en el artículo 44 sobre supremacía de derechos de niñez y el Código de la Niñez que fija edad mínima en 18 años. La comunidad argumenta que el concepto occidental de "niñez" no aplica a su cosmovisión. UNICEF presenta estudios de daños psicológicos. El juez constitucional debe resolver el conflicto de competencias recordando que "Marbury vs. Madison" **¿Debe prevalecer la universalidad de derechos de la niñez sobre el relativismo cultural cuando ambos tienen rango constitucional y sistemas jurisdiccionales propios?**

FILA 2. La Universidad Central establece un "Código de Convivencia" que prohíbe "propaganda política partidista" y crea un tribunal que suspende por 2 años a estudiantes y docentes. Un profesor es sancionado por dictar clase sobre "Fallas del sistema democrático" y 50 estudiantes por organizar foro sobre "Alternativas al capitalismo". Los sancionados interponen acción de protección invocando artículos 66 numerales 5 y 6 sobre libertad de expresión y cátedra. La universidad argumenta que su autonomía (artículo 355) impide revisión judicial de decisiones académicas internas. El Ministro de Educación amenaza con intervenir. El juez debe resolver el conflicto de conformidad con el caso "Marbury vs. Madison" **¿Puede la justicia constitucional revisar decisiones de una universidad autónoma que vulneran derechos cuando esto podría vulnerar la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada?**

FILA 3. Una lideresa ambiental es acusada de terrorismo tras protestas contra minería, basándose en interceptaciones donde critica al gobierno, su presencia en manifestaciones y declaraciones sobre "hacer todo lo necesario para defender la Pachamama". Un grupo no identificado dinamitó infraestructura minera causando dos muertes y 50 millones en daños. Desde prisión preventiva interpone acción de protección alegando criminalización de defensa de derechos de la naturaleza (artículos 71-74). La Fiscalía sostiene que el artículo 366 del COIP sobre terrorismo es aplicable independientemente de motivaciones ambientales. La minera amenaza con demandas internacionales. El juez reflexiona sobre el principio de "Marbury vs. Madison" de que interpretar conflictos normativos "hace a la esencia de la función judicial".

¿Es constitucional aplicar el tipo penal de terrorismo a defensores ambientales frente a la protección de derechos constitucionales como los derechos de la naturaleza?

FILA 4. Padres testigos de Jehová se niegan a autorizar transfusión sanguínea a su hijo de 10 años en estado crítico por leucemia, invocando artículo 66 numeral 11 sobre libertad religiosa y derecho a dirigir educación de hijos. El hospital solicita autorización judicial para transfusión que salvaría la vida del menor. Los padres argumentan que existen tratamientos alternativos sin sangre, aunque menos efectivos. El niño expresó deseo de "obedecer a Jehová" pero los médicos dudan de su capacidad de decisión. La Defensoría del Pueblo interviene invocando artículo 44 sobre supremacía de derechos de niñez. El juez recuerda que "Marbury vs. Madison" abordó conflictos entre diferentes interpretaciones constitucionales.

¿Debe prevalecer la libertad religiosa de los padres o el derecho a la vida del menor cuando ambos tienen protección constitucional y el niño aparentemente comparte las creencias familiares?

FILA 5. Una mujer de 45 años con esclerosis lateral amiotrófica en fase terminal solicita eutanasia activa, invocando artículo 66 numeral 9 sobre derecho a tomar decisiones libres sobre su vida. Su familia se opone por convicciones religiosas. El Colegio Médico argumenta que la eutanasia activa no está regulada y violaría el principio hipocrático. La Defensoría del Pueblo sostiene que el Estado debe proteger la vida (artículo 66 numeral 1) independientemente de la voluntad individual. La paciente presenta deterioro cognitivo intermitente que cuestiona su capacidad de decisión. El juez debe decidir recordando que "Marbury vs. Madison" estableció el deber judicial de resolver conflictos entre normas constitucionales aparentemente contradictorias. **¿Prevalece la autonomía personal para decidir sobre la propia muerte o el deber estatal de proteger la vida cuando no existe regulación legal específica sobre eutanasia?**

FILA 6. Un empresario compra 500 hectáreas para construir complejo turístico en la costa, cumpliendo todos los permisos ambientales y urbanísticos. Los estudios posteriores revelan que el terreno es zona de anidación única de tortugas marinas en peligro de extinción. El Ministerio del Ambiente ordena paralizar el proyecto invocando artículos 71-74 sobre derechos de la naturaleza. El inversionista alega vulneración de artículo 66 numeral 26 sobre derecho a la propiedad y artículo 82 sobre seguridad jurídica, habiendo invertido 12 millones de dólares. Ambientalistas argumentan que artículo 396 establece responsabilidad objetiva por daño ambiental. El empresario ofrece medidas de mitigación que costarían 8 millones adicionales. La comunidad local se divide: pescadores apoyan el proyecto por empleos, ecologistas lo rechazan. El juez para resolver el conflicto en base al caso "Marbury vs. Madison". Se cuestiona **¿Prevalen los derechos de la naturaleza sobre derechos patrimoniales adquiridos legalmente cuando no existía conocimiento previo del conflicto ambiental?**